

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCION SEGUNA**

Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos diecisiete (2017).

PROCESO: 110013331-021-2015-00140-00

DEMANDANTE: JOSE ALFONSO ROMERO FLOREZ

DEMANDADO: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Obedézcase y cúmplase lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “D”, en providencia del 15 de diciembre de 2016, auto notificado el 21 de julio de 2017, donde revocó el auto de fecha 13 de marzo de 2015, que había rechazado la demanda, en consecuencia, pasa al Despacho para resolver la medida cautelar presentada por la parte actora.

**I.- MEDIDA CAUTELAR DE LA SUSPENSION PROVISIONAL DEL
ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO.**

El apoderado Judicial de la parte actora presenta MEDIDA CAUTELAR (fls. 3 al 4) de suspensión provisional de los efectos de la Resolución Ordinaria 81117-001081 del 10 de julio de 2014, en lo que respecta al demandante, señor JOSE ALFONSO ROMERO FLOREZ y, en consecuencia, se ordene el reintegro provisional a la Contraloría General de la República.

Aduce además la parte actora que los perjuicios causados con la decisión de la entidad demandada, se encuentran probados, solicitando sean tenidos en cuenta los mismos, al momento de decretar la medida cautelar solicitada.

II. DEL TRÀMITE DE LA MEDIDA CAUTELAR:

Mediante auto de fecha 13 de febrero de 2015 (fol. 16), se ordenó formar un nuevo cuaderno y, se corrió traslado a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por el término de cinco (5) días, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 233 del C.P.A.C.A., y S.S.

Dentro del término concedido, la entidad presenta escrito el 4 de marzo de 2015, donde señala lo siguiente:

En primer lugar manifiesta el libelista su oposición a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, expidió la Resolución ORD-81117-1960-2014, en la que se acató el fallo de tutela emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B” dentro de la acción 2014-00232 y, en consecuencia, dejó sin efecto el referido acto administrativo (retiro del servicio) con relación al actor.

En lo referente al artículo 18 párrafo 3 de la Ley 1444 de 2011 y 6 del Decreto 4057 de 2011 y el Decreto 1303 de 2014, indica que la primera norma hace referencia a las facultades extraordinarias que el Congreso de la república otorgó al Presidente de la República, para ordenar la supresión del DAS y la creación de empleos en la Fiscalía General de la Nación para la reubicación de los funcionarios del DAS a los cuales le fueran suprimidos sus cargos.

Dicha norma impuso al Gobierno Nacional la restructuración realizada dentro de la Rama Ejecutiva de que trata la Ley 1444 de 2011, adoptando las medidas necesarias para que se de cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 párrafo 3 y 19 de dicha norma.

Que al verificar el decreto 4057 de 2011, se obtiene que a la Contraloría General de la República no se le trasladó función alguna del extinto DAS, adicionalmente esta entidad es un organismo autónomo e independiente de que tratan los artículos 113, 119 y 267, los cuales solo

pueden ejercer las funciones administrativas de su competencia, por lo que la entidad no ha quebrantado las normas de carrera administrativa general.

Frente al acto demandado, manifiesta que las actuaciones de la entidad se encuentran enmarcadas en el principio de legalidad y, fueron dictadas en cumplimiento a la decisión judicial que retiró del ordenamiento jurídico los presupuestos básicos de la creación de la Planta Transitoria de la Contraloría General de la República.

Por último resalta que en varias sentencias de tutela el Consejo de Estado se ha pronunciado concediendo la razón a la Contraloría General de la República, ordenando para el efecto al Gobierno Nacional, definir la situación del tutelante, reconociéndole los derechos que en virtud de la Ley le corresponden.

De esta manera solicita denegar la petición de suspensión provisional del acto administrativo, toda vez que las normas descritas no son aplicaciones a la Contraloría General de la República y, la entidad ha actuado conforme al ordenamiento jurídico.

III. PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

El artículo 230 del C.P.A.CA., las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión y tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

Dentro de las medidas cautelares que podrán ser adoptadas por el Juez, se encuentra la establecida en el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.CA, la cual, se refiere a la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo. Sin embargo, para la adopción de dicha medida, se requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 231 de la norma *ibídem*, el cual a la letra dice:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal

violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (subrayado fuera de texto)

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos: (...)

Planteado lo anterior, se tiene, que el C.P.A.C.A. en el numeral 3 del artículo 230 contempló como medida cautelar la suspensión de los actos administrativos, la que se encuentra condicionada a que el acto acusado contrarie de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta lo dispuesto en normas superiores; violación que se debe constatar con el simple cotejo de las normas que se confrontan o mediante documentos públicos aducidos en su solicitud, pues al requerirse un estudio de fondo, el juez debe agotar el procedimiento y diferir el pronunciamiento sobre la validez del acto acusado para el momento en que se dicte sentencia.¹

Bajo los presupuestos enunciados con anterioridad, se absolverá la medida cautelar deprecada por la parte actora.

La solicitud presentada tiene sustento en que la expedición de la Resolución Ordinaria 81117-001081 del 10 de julio de 2014, es manifiestamente violatoria de las normas Constitucionales, ya que no se entiende como un grupo de servidores del DAS en supresión fueron trasladados a la Contraloría General de la república, recibiendo un tratamiento discriminatorio legal y administrativo, no obstante la advertencia de un perjuicio, que se causó por la notificación del retiro forzoso del cargo desempeñado bajo el criterio de una interpretación legal.

Es así que de la simple lectura de los textos jurídicos citados como base de la solicitud y el contenido del acto acusado, no se puede llegar a concluir que el mismo no se ajusta a la legalidad, pues exige entrar a valorar el material probatorio arrimado al expediente, entre otras cosas, porque la circunstancia que motivó a la Contraloría de la República a expedir

¹ C.E. , Auto 21845 fe.7/2002 M.P. Alíer Eduardo Hernández Enriquez

el acto acusado, fue por el decaimiento legal de los Decretos 2711, 2712, 2713, 2714 y 2715 del 22 de noviembre de 2013 y los actos administrativos – Resoluciones Ordinarias N° 3279 del 23 de diciembre de 2013, 0390 del 13 de febrero de 2014, 0398 del 17 de febrero de 2014 y ORD 81117-00829-2014 del 18 de junio de 2014, decaimiento originado por la sentencia C-386 de 2014 dictada por la Honorable Corte Constitucional dentro del expediente D-9896 el 25 de junio de 2014, a través de la cual se declaró la inexequibilidad del artículo 15 de la Ley 1640 del 11 de julio de 2013; dichos presupuestos requieren de una valoración de las pruebas aportadas con el curso del proceso, lo cual, es una actividad propia de la sentencia, además es allí cuando debe definirse, como producto del debate que necesariamente debe surgir entre las partes, la capacidad de los documentos aportados en la demanda para desvirtuar la legalidad de los actos acusados, es decir, como la ilegalidad no surge a simple vista, como es la naturaleza de la medida cautelar, no es dable predicar una violación flagrante, de bulto, o prima facie, razón por la cual, se resolverá en forma adversa la medida cautelar solicitada.

De otro lado cabe advertir que lo que se busca con la presente medida cautelar es el reintegro provisional a la Contraloría del señor JOSE ALFONSO ROMERO FLOREZ, sin embargo, la misma entidad al momento de descorrer el traslado, indica que expidió la Resolución ORD-81117-1960-2014, en la que acató el fallo de tutela emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B” dentro de la acción 2014-00232 y, en consecuencia, dejó sin efecto el referido acto administrativo (retiro del servicio) con relación al actor; bajo estas circunstancias el proceso debe adelantar el proceso de nulidad y, determinar que efectos tuvo dicho fallo y, si con el mismo se cubren o no las pretensiones que hoy se reclaman.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución Ordinaria 81117-001081 del 10 de julio de 2014 proferida por la Contraloría General de la República, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese por estado esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

catc

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO – ORALIDAD

CIRCUITO DE BOGOTA

SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)

REFERENCIA:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Actor:	JOSE ALFONSO ROMERO FLORES
Demandado:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTROS
RADICADO:	2015-00140

Obedézcase y cúmplase lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “D”, quien en providencia del 15 de diciembre de 2016, la que fue notificada el 21 de julio de 2017, revocó el auto de fecha 13 de marzo de 2015, que había rechazado la demanda, en consecuencia, dispuso proveer sobre su admisibilidad.

No obstante lo anterior, observa el Despacho que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó el auto de fecha 13 de marzo de 2015, que había dejado sin efecto el auto admisorio de la demanda proferido el 13 de febrero de 2015 (fls. 57 al 58) y, en su lugar procedió a rechazar la demanda, entendiendo el Despacho que el auto admisorio de la demanda no fue afectado por la decisión de segunda instancia y, por el contrario cobró vigencia, sin embargo en dicha decisión se omitió vincular a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA.

Para el Despacho es necesario tomar medidas de saneamiento, en aras de enderezar el curso del proceso teniendo en cuenta que no fueron vinculadas todas las entidades accionadas a la presente acción, en su lugar, se procederá nuevamente a dejar sin efecto el auto admisorio proferido el 13

de febrero de 2015 (fls. 57 al 58), para en su lugar proceder al estudio correspondiente y, tomar todas las medidas que sean necesarias.

Por lo expuesto el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia,

RESUELVE:

PRIMERO: Obedézcase y cúmplase lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “D”, quien en providencia del 15 de diciembre de 2016, auto notificado el 21 de julio de 2017, revocó el auto de fecha 13 de marzo de 2015, que había rechazado la demanda.

SEGUNDO: Dejar sin efecto el auto admisorio de la demanda proferido el 13 de febrero de 2015 (fls. 57 al 58), conforme a lo manifestado a lo largo de esta providencia.

TERCERO: *Revisada nuevamente la presente acción y, por reunir los requisitos contemplados en la Ley 1437 de 2011, el despacho de conocimiento en PRIMERA INSTANCIA, ADMITE la presente demanda instaurada en ejercicio del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** presentada por el señor JOSE ALFONSO ROMERO FLOREZ, mediante apoderado judicial, contra la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA.*

Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del C.P.A.C.A para su trámite
DISPONE:

1. *Notifíquese personalmente la demanda a la NACION – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA a través del Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA a través de su señor Director*

o quien haga sus veces y, a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través del señor CONTRALOR GENERAL o su delegado facultado para ello; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 C.P.A.C.A, y el artículo 612 del C.G. del P., que modificó el artículo 199 del C.P.A.C.A.

2. Notifíquese personalmente de la demanda a la Agente del Ministerio Público delegado para este Despacho, en la forma prevista en el artículo 197 y 198 C.P.A.C.A, y el artículo 612 del C.G. del P., que modificó el artículo 199 del C.P.A.C.A.

3. Notifíquese personalmente de la demanda a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la forma prevista en el artículo 612 del C.G. del P, que modificó el artículo 199 del C.P.A.C.A.

4. Una vez notificadas las partes, quedan a disposición de las mismas, las copias de la demanda y sus anexos, en los términos dispuestos en el artículo 612 del C.G. del P, que modificó el artículo 199 del C.P.A.C.A. y, serán remitidas por correo certificado conforme al parágrafo 5 del artículo 612 del C.G. del P, que modificó el artículo 199 del C.P.A.C.A.

5. No se ordenará sufragar gastos del proceso, teniendo en cuenta que la parte actora ya aportó recibo de consignación por la suma de \$50.000 en escrito de fecha 25 de febrero de 2015 (fol. 62).

6. Vencido el término de que trata el parágrafo 5 del artículo 612 del C.G. del P., córrase traslado de la demanda por el término común de **treinta (30) días**, a la NACION –PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA a través del Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA a través de su señor Director o quien haga sus veces y, a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través del señor CONTRALOR GENERAL o su delegado facultado para ello; a los Terceros Interesados y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 172 del C.P.A.C.A.

7. Las demandadas deberán aportar con la contestación de la demanda todas las pruebas que tenga en su poder y pretenda hacer valer dentro del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del C.P.A.CA. Numeral 4.

8. Las Entidades demandadas deberán aportar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder.

9. RECONÓZCASE a la Doctora DARLIN LENIS ESPITIA, como apoderada principal de la parte actora, en los términos y, para los efectos del memorial poder visible a folios 1 al 2 del expediente.

10. Teniendo en cuenta que la parte actora manifiesta no aceptar la notificación por correo electrónico, se ordenará notificar todas las actuaciones por estado en virtud de lo establecido en el artículo 201 del C.P.A.C.A.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

catc

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCION SEGUNDA

EL AUTO ANTERIOR SE NOTIFICA A LAS PARTES EN ESTADO
ELECTRONICO N.º 28, A TRAVES DE LA PAGINA WEB
WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO. HOY 16 SEP 2017
DIECISIETE (2017), A LAS 8:00 A.M.


CARLOS EDUARDO PEÑA MONROY
SECRETARIO